

Sinopsis del informe:

"El veneno está servido: Glifosato y otros venenos, desde el campo a la mesa"

El modelo agrícola industrial, basado en monocultivos, en el amplio uso de productos químicos y de semillas genéticamente modificadas, y el modelo económico industrial, basado a su vez en políticas neoliberalistas de libre intercambio y en la liberalización del comercio, están envenenando a millones de personas y están expulsando a los pequeños agricultores de sus tierras, consintiendo a la empresas establecer monopolios y obtener el control de nuestras semillas, de nuestros alimentos y de nuestra salud.

El proceso completo de industrialización de la agricultura se basa en la falsa promesa de que sólo con este modelo de intensificación de la producción estaremos en condición de alimentar a la población mundial en aumento. A pesar de haber destruido buena parte de nuestro suelo disponible, contaminado el agua, puesto en peligro la biodiversidad y contribuido masivamente al cambio climático, el modelo de agricultura industrial [produce en cambio sólo una mínima parte de los alimentos disponibles a nivel global](#) . La mayor parte de los cultivos industriales a gran escala no son destinados a la producción alimentos, sino de productos, como el maíz y la soja transgénicos, destinados a la alimentación animal o a la industria de los biocarburantes.

Como se destaca en el informe "El mito de los Pesticidas Seguros", de Andre Leu, Presidente de IFOAM: En los últimos años, importantes estudios internacionales, incluyendo el [Informe del Cáncer de 2010 de la Presidencia de los Estados Unidos](#) , el [informe IAASTD](#) de las Naciones Unidas y de la Banca Mundial, el [informe sobre los Disruptores Endocrinos del programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas de 2012](#) , el [informe sobre la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de las Naciones Unidas](#), han confirmado la gravedad de los impactos producidos por el uso de fertilizantes y pesticidas químicos.

El reciente [informe de la relatora especial de las Naciones Unidas por el derecho a la alimentación](#), Hilal Elver, ha evidenciado las carencias en el cuadro normativo internacional en materia de regulación de los pesticidas, con especial atención a la insuficiencia de los parámetros en vigor respecto al impacto potencial de las sustancias tóxicas peligrosas comercializadas actualmente y extendida en el medio ambiente. El informe invita a las autoridades competentes a prestar mayor atención a las interferencias y a las presiones de la industria agroquímica, ya sea en el ámbito científico o en el institucional, y a garantizar una mayor transparencia en los procedimientos de evaluación del riesgo para la salud y el medio ambiente.

El mismo Andre Leu ha llegado a declarar, en el informe ["El Mito de los Pesticidas Seguros"](#): *"Si el uso de los pesticidas viniese regulado sobre la base de los estudios*

científicos más actuales y examinados por pares (peer-reviewed), no existiría ninguna base científica para apoyar la afirmación de que los niveles de residuos químicos actualmente presentes en nuestros alimentos y en el medio ambiente pueden considerarse seguros”.

Objeto de la más reciente controversia es el glifosato, componente básico de algunos herbicidas que hace muchos años se vienen utilizando y liberando al medio ambiente de manera extensiva, como el RoundUp, producto de Monsanto. En Mayo de 2015, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) clasificó el glifosato como [sustancia “probablemente cancerígena”](#) para el ser humano. Posteriormente, las valoraciones opuestas han sido expresadas desde la Autoridad [Europea por la Seguridad Alimentaria \(EFSA\)](#) y desde la [Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos \(EPA\)](#).

En este escenario de opiniones en conflicto, un amplio movimiento, compuesto de exponentes independientes de la comunidad científica, expertos legales, organizaciones sociales y periodistas, denuncian hace tiempo numerosos casos de distorsión de los datos científicos, así como los conflictos de intereses y connivencia con la industria agroquímica de las mismas instituciones responsables de la evaluación del riesgo y de los procedimientos de regulación y aprobación de los productos a base de glifosato. Véanse los casos de Europa, en los cuales se denuncia una proximidad institucional basada en gran parte en estudios proporcionados por las propias industrias, y de los Estados Unidos, donde una serie de documentos, hechos públicos a petición de un tribunal, han revelado una collusion entre Monsanto y EPA con el fin de socavar el procedimiento de determinación de la cancerogenicidad potencial del glifosato para el ser humano.

En octubre de 2016 una coalición de movimientos de la sociedad civil internacional ha establecido un tribunal ético contra una de las mayores multinacionales estadounidenses del sector agroquímico: Monsanto. El [Tribunal Monsanto](#) ha dado la posibilidad a las víctimas, a los médicos, a los expertos del mundo académico y a abogados internacionales de denunciar los daños ambientales y sociales causados por Monsanto, sobretodo en relación al impacto de la producción del pesticida RoundUp, a base de glifosato. La opinión consultiva jurídica de los jueces del Tribunal Monsanto, que tuvo lugar el 18 de abril de 2017, concluyó que Monsanto ha llevado a cabo acciones que han perjudicado negativamente el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud y ha confirmado la necesidad de afirmar la primacía de los derechos humanos y medio ambientales dentro de un marco jurídico internacional, especialmente en relación a la conducta de las multinacionales.

En el contexto institucional y normativo, por otra parte, los casos reales, como los de [Sri Lanka](#) y [El Salvador](#) , donde los productos con base en glifosato han sido prohibidos debido a que se consideran relacionados con la aparición de un número elevado de nefritis intersticial crónica en las comunidades agrícolas. En Argentina y en los Estados

Unidos, en cambio, se están llevando a cabo numerosas batallas legales contra las empresas agroquímicas y las instituciones que defienden sus intereses, para denunciar la estrecha correlación entre el aumento de algunas enfermedades, tales como cáncer y malformaciones congénitas y la exposición a los pesticidas con base en glifosato.

A esto se añade que en muchos países en vías de desarrollo se está desarrollando una agresiva campaña promocional por parte de las empresas agroquímicas para convencer a los agricultores de que adquieran sus productos, los cuales en la mayor parte de los casos, no informan de información relativa a los riesgos para la salud. La evidencia de efectos de intoxicación aguda, subaguda y crónica viene siendo negada sistemáticamente por las empresas productoras. El enfoque promocional de la industria agroquímica, siendo profundamente inmoral, no es objeto de atención de los gobiernos o de las instituciones responsables de regular el uso de las sustancias químicas y [proteger la salud de la población](#).

La producción de gran parte de las sustancias químicas se concentra en las manos de unas pocas empresas multinacionales: Bayer CropScience, Monsanto, BASF, Syngenta, ChemChina, Dow AgroSciences y DuPont. Estas empresas, especialmente Monsanto y Bayer, producían originalmente armas químicas para la industria de la guerra, como el agente naranja utilizado por el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. En las últimas décadas, estas empresas han identificado el sector de la agricultura como el sector en que comercializar las mismas sustancias.

En las últimas décadas, estas empresas han identificado el sector de la agricultura en la que continuar comercializando sus productos. Entre estos gigantes se están produciendo fusiones y adquisiciones que tienen como objetivo aumentar aún más su tamaño: es lo que está pasando entre Monsanto y Bayer, entre Syngenta y Chem-China, incluyendo Dow y Dupont. Es fácil imaginar que de esta manera la presión sobre los gobiernos e instituciones de diversos países y a los reglamentos de salud y ambientales no interfieren con su negocio y se espera que sus aumenten.

Multinacionales más grandes y potentes que podrán obtener beneficios ulteriores de la ratificación de los acuerdos comerciales internacionales de libre intercambio, como el Ceta, tratado suscrito recientemente entre la Unión Europea y Canadá. Se trata de acuerdos de nueva generación que resultan fuertemente influenciados por el lobby de las grandes industrias y que contienen el controvertido mecanismo de los tribunales internacionales (Isds o Ics en el caso del Ceta). Tal mecanismo permite a las multinacionales llamar a juicio a los gobiernos nacionales con el objetivo de solicitar una compensación en el caso de aprobación de reglamentos adversos a sus intereses, Incluso cuando éstos protegen la salud de ciudadanos y trabajadores. En este escenario, toda la normativa nacional y local existente para proteger el medio ambiente y la salud se encuentran en riesgo.

La única respuesta posible a la creciente degradación ecológica, a la pobreza, a la emergencia sanitaria y a la malnutrición es superar el paradigma de la economía linear extractiva, en la cual se inserta el modelo agrícola industrial, en favor de la circular regenerativa, para guiar no sólo la gestión del medio ambiente y de la agricultura, sino toda las posibilidades económicas y sociales.

Un modelo agrícola que respete el ambiente, los recursos y la salud y que se encargue de la integridad del suelo y de la biodiversidad, trabajando en armonía con los procesos naturales, que sustituya el proceso linear de explotación del suelo y de los recursos con un proceso circular de restitución que garantice la resiliencia, la sostenibilidad, la justicia y la paz.

El camino de la agroecología fue abandonado por las instituciones de investigación y por los gobiernos a causa de las presiones llevadas a cabo por parte de las grandes empresas químicas, que son ahora las empresas biotecnológicas y fabricantes de semillas. Se trata en realidad de prácticas todavía en uso, si se considera que la mayor parte de la población mundial está compuesta de pequeños agricultores y que ellos producen la mayor parte de los alimentos que comemos.

En el [informe de 2010](#)¹⁶ del relator especial de las Naciones Unidas por el derecho a los alimentos, Olivier De Schutter, argumenta que *“Los agricultores locales a pequeña escala en las regiones críticas del planeta podrían duplicar la producción alimentaria en una década utilizando métodos ecológicos”,* ya que *“los proyectos agroecológicos han mostrado un incremento medio del 80% sobre los cultivos en 57 países en vías de desarrollo, +116% en todos los proyectos africanos. Los proyectos recientemente llevados a cabo en 20 países africanos han confirmado la posibilidad de duplicar la cosecha en un período que varía entre 3 y 10 años. La agricultura convencional necesita recursos costosos, contribuye al cambio climático sin embargo no resiste a los shock climáticos. Simplemente, a día de hoy ya no es la mejor opción”.*

Este dossier sobre agrotóxicos tiene la intención de denunciar no sólo las presiones en curso para la comercialización de un producto específico, el glifosato, a pesar de su potencial toxicidad y los riesgos conocidos para la salud humana y el medio ambiente, sino también la fragilidad de un sistema de de regulación que debe proteger a los consumidores y ciudadanos, protegiéndolos de los voraces apetitos multinacionales. Se trata de empresas que tienen como objetivo únicamente aumentar los beneficios de sus accionistas con planes a corto plazo.

La preocupación por el medio ambiente y la salud de los consumidores en el medio y largo plazo no están cubiertos por su visión. Es por esta razón que los gobiernos y autoridades supervisoras supranacionales deben mantener alta la guardia. Sin embargo, grandes inversiones en la presión ejercida por las compañías multinacionales las cuales pagan millones de dólares a los organismos especializados para ejercer presión sobre los políticos a menudo obtienen el objetivo deseado.

La inversión de las compañías multinacionales para asegurarse vía libre por los órganos de control también están dirigidos a la comunidad científica que, en teoría, debería ser imparcial.

¿Por cuánto tiempo más consumidores y ciudadanos podrán soportar un modelo que enriquece a unos pocos individuos, privados e institucionales, e implica un daño irreversible a su salud y su entorno?

Más allá de los mitos y propaganda creadas por las multinacionales, encontramos suficientes estudios, investigación y casos concretos para afirmar que no necesitamos utilizar productos agrotóxicos para producir nuestros alimentos.

Las alternativas a los dictados del "Cartel de los venenos" existen y es nuestra tarea encontrarlas, compartirlas y ponerlas en práctica de manera transparente y participativa.

Navdanya International

May 2017

www.navdanyainternational.org

